Portugal y España: el 'Estado de Excepción' por motivos financieros

Autor(es): Lacasta Zabalza, José Ignacio

Publicado por: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

URL persistente: URI:<http://hdl.handle.net/10316.2/39772>

DOI: DOI:https://doi.org/10.14195/0870-4260_57-2_13

Accessed : 26-Apr-2023 10:50:10

A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em <https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos>.

Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença.

Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra.

Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
FACULDADE DE DIREITO

BOLETIM DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS

HOMENAGEM AO PROF. DOUTOR ANTÓNIO JOSÉ AVELÃS NUNES

VOLUME LVII Tomo II

2 0 1 4

Organizadores:

LUÍS PEDRO CUNHA
JOSÉ MANUEL QUELHAS
TERESA ALMEIDA

COIMBRA

PORTUGAL Y ESPAÑA: EL ‘ESTADO DE EXCEPCIÓN’ POR MOTIVOS FINANCIEROS

1. La quiebra del contrato social

Hace muchos años ya que el autor de esta intervención conoció a António AVELÃS NUNES, que ahora se jubila y merece los debidos reconocimientos. Desde entonces se derivó un notable aprecio por su persona y por su obra (antes por la primera que por la nada desdeñable segunda). En el viejo libro *Cultura y gramática del Leviatán portugués*, que fuera Obra Finalista del Premio Nacional de Literatura/Ensayo de España de 1989, suceso español un tanto raro pues se trataba de una temática portuguesa, ya fueron puestas de manifiesto varias ideas-fuerza de Avelãs Nunes (LACASTA ZABALZA, 1988, pp. 506-508). Allí se desbrozaba el alcance de las nacionalizaciones, a propósito de un trabajo de este catedrático de Economía de Coimbra, sobre el crucial asunto (de plena actualidad pero desde otra perspectiva muy diferente) de la delimitación de lo público y lo privado, junto con una crítica suya a varias ideas patentes en las decisiones del Tribunal Constitucional portugués. Líneas de 1985 que Avelãs Nunes había publicado en el acreditado — y bien conocido en España — *Boletim da Faculdade de Direito* de la Universidad de Coimbra. En ese mismo ensayo español sobre el Leviatán portugués, se acogían y comentaban otras publicaciones de

AVELÃS NUNES, de la editorial Atlántida, de 1971 y 1972 respectivamente.

Disculpe el lector o lectora esta leve autocita, pero se quiere significar con esto, de manera breve y gráfica, que, desde esas fechas, ha llovido mucho, demasiado, sobre la península ibérica. De manera que esa discusión sobre el alcance de las nacionalizaciones, al socaire de la Constitución de 1976 y, como todavía entonces se decía, de las conquistas de Abril, ha quedado irreconocible ante las circunstancias actuales. Cuando la discusión entre lo público y lo privado tiene hoy unos tintes mucho más dramáticos, y las privatizaciones españolas y portuguesas poseen ya el retratado cariz de un alejamiento consciente de las necesarias — y ahora soslayadas — categorías del interés general y el servicio público. Atrás quedan los compases de la partitura del Tribunal Constitucional portugués en su Acuerdo n.º 107/88, que tumbaba el proyecto gubernamental de Aníbal Cavaco da Silva favorable a la flexibilización del despido por el cese del contrato individual de trabajo. *O tempora, o mores!*, cuando el Tribunal Constitucional luso hasta se permitía hablar de causas constitucionalmente lícitas de despido y de valores tales como la seguridad en el empleo.

El signo de los tiempos ha ido en absoluta dirección contraria, pues los constructores económicos (y jurídicos) de esa *persona ficta* llamada Europa, aunque a veces le apelen Europa social, en palabras del año 2010 de Avelãs Nunes (AVELÃS NUNES, 2010, p. 157):

“privatizaron todo, desregularon todo, entregaron al gran capital la producción y la distribución de bienes y servicios esenciales para la vida de las personas (¡incluyendo el agua!).”

En la filosofía jurídica medieval, el rey estaba presente en todas las decisiones de los tribunales, poseía el don de la ubicuidad legal, por más que no administrase el Derecho perso-

nalmente; tal ficción era posible porque el titular de la corona era un simple mortal y, al mismo tiempo, poseía un Cuerpo político que eliminaba todas las flaquezas e imperfecciones de la física naturaleza humana. Como resultado de todo esto y de la incuestionable Ley natural informadora de la norma positiva, el rey estaba a la vez por encima y bajo el Derecho, poseía dos cuerpos y era una *persona ficta* (KANTOROWICZ, 1985, pp. 16-22 y 144-146). De ahí que se recuerde esa importante ficción para calibrar la peculiar circunstancia de la Unión Económica y Monetaria europea y luego de la Unión Europea a secas, que no responde a los parámetros tradicionales de la soberanía ni de las soberanías, pues el Estado nacional no es su límite, pero tampoco es una federación ni tiene un gobierno ni un presupuesto de carácter federal y, pese a ello, posee personalidad jurídica y decide, vaya si decide, en unos términos estratégicos de los que retira de la actividad empresarial a los mismísimos Estados (AVELÂS NUNES, 2010, p. 232). Aunque Europa es más compleja que la corona de un rey medieval y dista de tener una voz única que diga con claridad quién tiene el mando; como puede verse cuando se discute sobre los mecanismos de resolución de las crisis bancarias, entre la Unión Bancaria Europea (UBE), el Banco Central Europeo (BCE), el Consejo de Ministros de Economía y el Parlamento europeo. Ni el federalismo ni la soberanía ni la decisión unívoca pueden explicar ese funcionamiento — donde pesan tanto los países — de la cúspide europea. La falta de un verdadero poder constituyente popular europeo da impulso a la acción de un instituto como el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Un órgano que legisla para el futuro, por medio de disposiciones generales obligatorias que tienen valor de ley. Sus decisiones pueden alcanzarse por mayoría, pero no se explican sus votos particulares. Ha sido, lo estudia el constitucionalista Gerardo PISARELLO, un poderoso motor constituyente y técnico del neoliberalismo

en curso, que ha servido para el impulso de la libre circulación de capitales, servicios y mercancías, pero ha restringido el uso de valores de interés general o salud pública, al favorecer tanto las privatizaciones como la rebaja de los estándares sociales y servicios públicos. Todo, en medio de una aureola de independencia y ganada competencia que no pueden disimular su nula relación con la democracia debidamente ejercida (PISARELLO, 2011, pp. 180-190).

La metáfora anclada en la Edad Media no es del todo original. El escritor luso y profesor de Literatura Gabriel Magalhães ha escrito un hermoso ensayo actualizado sobre Portugal (y España) en el que, de manera muy juiciosa, aboga por una peninsularidad bien llevada, amistosa, y no por un iberismo irreal y problemático que difícilmente pudiera soportar las tensiones de la propia España (se refiere sobre todo a Catalunya, de la que Magalhães es un buen conocedor). En cuanto a la ubicación de Portugal en Europa dice así (MAGALHÃES, 2012, p. 168):

“Portugal es un buen ejemplo de esta medievalización de Europa, de la que estamos hablando. Cuando pensábamos que estábamos levitando en la modernidad más desarrollada, nos hemos encontrado a nosotros mismos retrocediendo espantosamente rumbo a nuestro pasado.”

Y ese pasado es el de tantos pueblos portugueses y castellanos, en los que hay un castillo en su punto más alto: “una fortificación que lo domina todo.” Es hoy la órbita mágica del dinero planetario, tan distante como kafkiano, dispuesta a engullir, a ahogar escribe Magalhães, a Portugal (y a España se puede añadir).

Este luminoso escrito de Magalhães tiene sin embargo algún borrón en sus cuartillas. Se pronuncia en contra del derecho a decidir de las mujeres en la delicada cuestión del

aborto (p. 174). Poco diplomático y oportuno ese juicio en un libro publicado en castellano, cuando el ministro español Ruiz-Gallardón ha elaborado un proyecto de ley que suprime ese derecho a decidir de las mujeres. Lo que ha encontrado contestación hasta entre medios católicos y en las propias filas del partido político en el Gobierno. Y, lo que es peor, ha creado un fuerte conflicto social que no existía con la anterior legislación. Más de media España, a tenor de las encuestas de todas las tendencias, está en contra de la supresión de la libertad de las mujeres en la disposición de su propio cuerpo. Por otra parte, el proyecto gubernamental español ha sido muy contestado en la misma Europa (en Francia sin ir más lejos).

Mas volvamos a la Economía política: ¿tanto nos ha hecho cambiar esa imprevista y complicada Europa? ¿tanto va de 1985 al 2010? ¿tanto de la seguridad en el empleo al despido libérrimo? ¿y del alcance de las nacionalizaciones a la privatización de todo, incluso de las mismas nacionalizaciones? Porque en España hemos asistido atónitos al rescate con miles de millones de euros de la deuda privada de la banca con capital público. Los periódicos nos cuentan que Bankia, entidad financiera nacionalizada a la que se le inyectó una ayuda del Estado de 22.242 millones de euros, ya tiene beneficios en el año 2013 (818 millones de euros), y pronto va a estar en condiciones de ser privatizada de nuevo, pues su presidente José Ignacio Goirigolzarri cree que en dos años se podrá vender el banco; pero al mismo tiempo este dirigente afirma desconocer si se va a recuperar o no el dinero de los contribuyentes, nuestro dinero, puesto por el Estado (BARRÓN, *El País*, 4.2.2014). Entre tanto, quedan en el camino 4.600 empleados despedidos (el 23, 1% de la entidad) y se han cerrado 1.120 oficinas. No es sino el descarnado muestrario de la inmoralidad imperante en la actividad financiera: se reflotan los bancos con dinero público — lo que hace crecer el millo-

nario déficit del Estado — y se privatizan después ante los mejores postores.

Cobra así dimensión práctica un viejo sueño de los grandes banqueros españoles. Que reveló un importante libro, un clásico, de la formación cultural económica en nuestra juventud universitaria. Juan MUÑOZ escribió en 1969 *El poder de la banca en España*, con un interesante prólogo de Juan Velarde; en esta obra muy documentada, los dirigentes del poder financiero español, en sus escritos y discursos a las Juntas de Accionistas (Banco de Santander, Español de Crédito, Hispano Americano, Popular, etcétera), abogaban por la *subsidiariedad* del Estado. Institución estatal que solamente debía aparecer en la economía cuando hubiera problemas para los bancos, entonces en perfecta y cómoda simbiosis con la dictadura de Franco. Y la democracia no figuraba esos años, desde luego, entre las preocupaciones de los amos de las entidades financieras españolas (MUÑOZ, 1969).

Vivir para *ver*. Pero hay que huir de la añoranza, de la *saudade* portuguesa o la *morriña* gallega y de los melancólicos consejos de la formidable poesía medieval castellana (Coplas de Jorge Manrique a su padre) cuando decía: cualquiera tiempo pasado fue mejor. Porque no fue mejor y en España se conoció el hambre bajo la dictadura de Franco, de forma oficial hasta 1951 cuando se suprimieron las cartillas de racionamiento obligatorias para toda la población. Desde el fin de la guerra civil española hasta 1951 van 12 años de hambruna institucionalizada, según lo estudia Joaquín Estefanía, cuando en otros países (Italia, Francia) no duró más que tres años ese obligado ahorro alimenticio planificado, causado en esas naciones europeas por la tremenda Segunda Guerra Mundial (ESTEFANÍA, 2007, pp. 85-86). Conviene rememorar estos aspectos poco discutibles, con cifras, porque en España hay hasta canales de televisión dedicados a la nostalgia de la dictadura de Franco (*Intereconomía* entre otros) cuando, nos ase-

guran estos medios de comunicación contra toda experiencia, se vivía mejor y de un modo más ordenado que ahora.

Perspectiva histórica y ética de la resistencia que siempre ayuda a relativizar; desde la que no hay que admitir como G. W. F. Hegel que todo lo real sea por necesidad racional (HEGEL, 1955). Pues razón y realidad, como pensar y ser, no configuran la mente humana como una especie de receptáculo de los hechos; ya que, de ser así, se negaría que el pensamiento construye también lo que llamamos de modo convencional esa realidad de la que forman parte nuestras propias ideas. Y esto sería tanto como aceptar que el desastre social generalizado que vemos hoy en España y Portugal tenga que ver siquiera con algo de racionalidad. O que haya caído sobre nuestras cabezas de manera inevitable, de modo similar a algo derivado de la naturaleza, como el anticiclón de las Azores.

Porque, ¿qué es en definitiva la racionalidad? ¿referida a qué? Si cavilamos en términos económicos, es posible que el planteamiento nos conduzca a elegir entre el mercado y el Estado con la condena — que se quiere irremisible — de quienes no aceptamos la omnisciencia de la *lex mercatoria* al rincón de los “no hay alternativas” o al de “no hay dinero” para nuestros menesteres centrados en la política y en las necesidades de la mayoría de la sociedad civil. En España, pese a una rebeldía social *in crescendo*, no es nada fácil que la intelectualidad crítica se haga escuchar en los medios de comunicación; como asevera con contundencia el catedrático barcelonés de Economía Aplicada Vicenç Navarro (NAVARRO, *Público*, 3.2.14):

“...el debate político en España constantemente tiene lugar en el terreno definido por las fuerzas conservadoras y neoliberales que controlan los medios de información y persuasión.”

Racionalidad que no se ciñe en exclusiva al ámbito económico, pues cabe preguntarse con toda legitimidad qué ha

sido de nuestro Estado democrático y social de Derecho de las Constituciones de Portugal y España, qué fue del Derecho y qué de la Filosofía del Derecho en estas circunstancias extraordinarias de zarandeo constante de nuestras economías a cargo de los llamados mercados. Esa es la preocupación central de esta intervención así como la reflexión sobre el futuro acerca de la seguridad jurídica en cuyo seno nos hemos educado y, hasta ahora, mal que bien, habíamos vivido en España y Portugal.

Pero ahora moramos durante el siglo XXI en lo que se ha dado en llamar la Economía política de la *incertidumbre*. Que Jesús Ignacio MARTÍNEZ GARCÍA caracteriza como una situación que hace vulnerable cualquier posición social, impone otras reglas para terminar precisamente con las reglas, decisión tomada por los poderes de una economía extraterritorial, donde las fuerzas del mercado cargadas de incertidumbres pretenden acabar con las instituciones protectoras, aseguradoras y portadoras de certezas, del viejo Estado social de Derecho. Esta Economía política de la incertidumbre lleva consigo (conlleva dice Martínez García) “una falta de resistencia de los afectados” (MARTÍNEZ GARCÍA, 2012, pp. 97-118). Este lúcido diagnóstico general sobre la incertidumbre parece no atinar con esa observación de la falta de resistencia de quienes sufren esas acciones contra el Estado social. Tiene no poco humor esta reflexión, pues el profesor Martínez García es natural de Burgos, y ha sido precisamente allí, en el barrio obrero de Gamonal de unos cincuenta mil habitantes, de los cuales (y esto explica muchas circunstancias del conflicto) hay unos 18.000 en paro, donde una rebelión social ha impedido un proyecto privatizador del Ayuntamiento y los poderes económicos, poniéndose la población en literal y pacífico pie de guerra durante varias semanas. Con una enorme repercusión en la prensa, radios y televisiones. El triunfo de ese levantamiento ha convertido a Gamonal de Burgos en un

símbolo victorioso de la resistencia popular del año 2014. Casi al mismo tiempo que médicos y trabajadores de la sanidad de Madrid han conseguido paralizar, con acciones judiciales y movilizaciones populares, el proyecto de privatización de los hospitales madrileños. No hay que magnificar la resistencia en España, pero sí levantar acta, como corresponde a profesionales del Derecho, de la importancia de los movimientos resistentes que consiguen sus objetivos. Que el asunto de Gamonal no es algo anecdótico, nos lo recuerda el economista Antón Costas (COSTAS, *El País*, 2.2.2014):

“Sin querer sacar conclusiones apresuradas, la revuelta popular ocurrida en el barrio burgalés de Gamonal puede ser un ejemplo. Para mí, lo más significativo no ha sido la revuelta en sí misma, un episodio local que en principio no debía esperar tuviese efectos más allá del lugar en que se produjo. Lo más sintomático es que ese motín popular ha sido motivo de cierta simpatía y apoyo en otros lugares de España. Este hecho hace pensar en la existencia de un malestar social generalizado, pero contenido que puede saltar por cualquier hecho menor.”

Desde una mirada histórica, la racionalidad jurídica y política estatal de la que nos nutrimos es, como tantas otras cosas, un producto genuino de la Ilustración. Un pensamiento (BECCARIA, ROUSSEAU, DIDEROT) proyectado sobre reglas generales y nunca sobre excepciones. El motivo tiene mucho que ver con la legitimidad de esta construcción que, a su vez, se vincula, vía la utilidad (Beccaria) o por el camino de la Razón con mayúsculas (DIDEROT) a las mayorías ejercientes de su voluntad. O, en palabras del genial Diderot sobre el Derecho Natural sacadas de la Enciclopedia (DIDEROT, 1989, pp. 19-20):

“...dado que dos voluntades, una general y otra particular, la primera no yerra jamás, no es difícil apreciar a cuál de las dos

habría de pertenecer, para felicidad del género humano, la potencia legislativa, y qué veneración se debe a los augustos mortales cuya voluntad particular reúne la autoridad y la infalibilidad de la voluntad general.”

Que en ese vehículo privilegiado, la voluntad general, viaja la democracia, el sufragio universal, las elecciones libres, el poder de las mayorías, los intereses de las multitudes (la felicidad del género humano, según DIDEROT), y hasta el contrato social, es algo indudable, y que nuestros ibéricos Estados democráticos y sociales de Derecho han tenido ese soporte legitimador después de las dos últimas dictaduras sufridas, pues también. Lo que hace falta saber es si las medidas adoptadas en España y Portugal con la excusa de la debacle financiera acontecida poseen esa relación inmediata o mediata con la voluntad general. A juicio de quien esto escribe, y no está solo en su razonamiento, decididamente no. Cómo no recordar a Jean Jacques Rousseau y su necesaria vinculación de las leyes, del aparato normativo estatal, a la antes reiterada voluntad general; Rousseau procedía así en su famoso *Discurso sobre la Economía política* (ROUSSEAU, 1985, p. 9):

“Esa voluntad general, tendente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte, es el origen de las leyes y la regla de lo justo y de lo injusto para todos los miembros del estado, en relación con éste y con aquéllos.”

Claro que esta Economía política de Rousseau no es ciertamente la de la incertidumbre. Es más, DIDEROT ha recurrido a la ficción del dogma de la infalibilidad propio de la teología para describir los atributos de la voluntad general una vez expresada. Es decir, que lo justo y lo injusto de las leyes lo decide y clarifica la voluntad general; sin ella no hay atisbo de justicia en el Estado. De lo que se trata en estas

líneas, entre otras cosas, es de saber si las medidas fabricadas en España (aunque también en Portugal) por la crisis financiera tienen que ver o no con la democracia, con, en esencia, la normalidad y normativa derivada de esa voluntad general. Claro que a quienes han bendecido las medidas antisociales en España y Portugal, y en España la reforma de la Constitución con la unilateral teoría del déficit público, estos razonamientos les parecen demasiado abstractos, se les antojan, como a Hegel el contrato social de ROUSSEAU, ficciones innecesarias que no tienen en cuenta la realidad. A su parecer no son realistas, vamos, dado que lo extraordinario y la excepción (la crisis), la necesidad económica, se imponen sobre la normalidad del Estado de Derecho y la democracia.

En cierto modo HEGEL en sus *Grundlinien* de la Filosofía del Derecho se anticipa ya a las argumentaciones del neoliberalismo vigente; al negar validez al contrato social como esqueleto del Estado y sus leyes, así como al oponerse a la proyección pública de ese negocio y metáfora democrática (LACASTA ZABALZA, 2009, pp. 799-841). En cambio sí admite HEGEL el necesario contrato en el ámbito privado, como desarrollo del Código de Napoleón, en tanto que figura jurídica que se practica escrupulosamente y palanca del tráfico económico de la época. Era que todavía consiste en las palabras que se cumplen, la formalidad de las profesiones jurídicas, las implacables letras de cambio, los documentos observados y las deudas pagadas. Que, un poco más adelante, serán tiempos retratados en la acción de los descollantes notarios de las novelas de Gustave Flaubert y Honoré Balzac. *Maître le Notaire* es un tratamiento francés solemne que ha dominado, por su relevancia social, todo el siglo XIX y casi todo el XX. Nada que ver con las grandes firmas de los negocios neoliberales donde los gestores, contables, economistas en general y particular, han sustituido a los viejos abogados y notarios que daban fe de lo sucedido. A veces, perdónese la ironía, lo mejor

es no dar fe de nada en el mundo actual de los negocios y sus paraísos fiscales.

António Hespanha ha estudiado al detalle, con materiales de la sociología jurídica, el cambio que se ha operado en las profesiones jurídicas portuguesas (HESPANHA, 2012, pp. 11-80). A vista de pájaro, lo mismo o muy parecido es válido para España. El carácter global de los grandes negocios exigía saberes también globalizados. Esa es una de las premisas de la transformación que ha dado preeminencia a la ingeniería financiera y fiscal, la gestión del riesgo, y a toda una tropa de economistas, emprendedores y contables gestores, que han remitido a un lugar subalterno los saberes jurídicos, como no sea para declararlos siervos de costes y beneficios o para usar el dominio de técnicas de ocultación de la responsabilidad civil y criminal o para dificultar la actuación de la legislación intervencionista. Los saberes empresariales reemplazan a los tradicionales saberes jurídicos y a sus preocupaciones por la intangibilidad de los derechos, protección de los ya adquiridos, satisfacción de los consumidores y demás componentes del interés general de la ciudadanía. En el seno mismo de la profesión jurídica, ganan plaza los especialistas en incertidumbre porque las normas responden a una pluralidad de ordenamientos jurídicos en la que es difícil orientarse. Es la abogacía de los negocios, una nueva élite, que desplaza progresivamente a los abogados lugareños especializados en las ramas clásicas, Derecho civil, criminal, universitarios puros en su cátedra, constitucionalistas que defienden la Constitución o los típicos juristas al servicio del Estado por antonomasia (los magistrados). Éstos, los magistrados, la magistratura judicial en su conjunto, en España son acusados por el poder político de ser antiguos y no estar al día con sus decisiones (cuando tutelan a las víctimas de los desahucios, persiguen la corrupción, legitiman los *escraches* a las autoridades o protegen la libertad de expresión como derecho

fundamental); en Portugal parece que para las nuevas élites son un obstáculo y les reprochan su carácter conservador y nacionalista que dificulta la resolución mediante el arbitraje de los conflictos entre personas individuales. En Portugal y España, la magistratura tiene desde luego la animosidad de los neoliberales en el poder político o en el seno de las nuevas élites jurídicas.

El Derecho pierde así su dimensión pública y, como en HEGEL, se vuelve privado y algo bastante distante de aquella idea que garantiza el contrato social libremente elegido y consentido. A la luz de la más moderna epistemología, que se critique al contrato social por ser una ficción es una postura bastante endeble; debilidad que no puede taparse con un pretendido realismo de los hechos o fáctico (MARTÍNEZ GARCÍA, 2012, pp. 97-118):

“La ficción no se contrapone a la realidad. Hay una realidad de la ficción y cuanto más desarrollada está una sociedad más necesita de la ficción. El derecho se apoya masivamente en la ficción. Lo que hace es *fingir certezas*, y también presuponerlas, darlas por supuesto.”

En España existía un contrato social, apoyado en una sanidad pública y una educación que funcionaban de modo razonable; el paro no alcanzaba las terribles proporciones de hoy día y la sociedad veía en Europa un modelo a seguir y un cierto faro democrático. Todo eso ha cambiado y el desempleo, los ataques al Estado social y las privatizaciones, el retroceso de los salarios e ingresos familiares, la toma de decisiones extraterritoriales pero que afectan a la vida cotidiana, la lejanía de la *persona ficta* Europa con respecto a su legitimación democrática o, si se quiere, su más que remota relación con la voluntad general, han hecho que algunos economistas, se supone que más pendientes de las estadísticas

y de la aritmética que las profesiones jurídicas, hayan consolidado precisamente la metáfora de la fractura del contrato social para describir o diagnosticar lo que pasa en España.

El contrato social no es una categoría formalizada en un documento signado por los titulares de la voluntad, sino que es un acuerdo, expreso o tácito que, como indicaba MARTÍNEZ GARCÍA, da por supuesto las certezas. Desde una perspectiva histórica, Hippolyte Taine, tan crítico de la Revolución francesa, se maravillaba del idilio ciudadano, de la fiesta jurídica y política que traía consigo el contrato social (TAINÉ, 1986, pp. 467-469):

“Pues no solamente sus principios han pasado a las leyes y su espíritu anima la Constitución completa, sino que además la nación parece que ha tomado en serio su lance ideológico, su ficción abstracta.”

Así que el contrato social se hizo carne y habitó entre nosotros. Certero TAINÉ cuando lo describe como “efectivo y espontáneo”, porque no duda de su efectividad manifiesta. Que esté vivo en la cotidianidad, con un consentimiento expreso o tácito de las diversas voluntades, hace depender de ello la paz de la sociedad civil. Y su representación teórica se hace más fácil de entender cuando falta o se rompe ese negocio jurídico metafórico, cuando aparece el conflicto social con toda su crudeza o la crisis social que puede ser algo mucho más grave (COSTAS, *El País*, 2.2.2014):

“El discurso político sobre el final de la crisis puede ser percibido como ofensivo y hasta provocador para aquellos ciudadanos que, después de cinco años de sacrificios, no les queda nada ya en la despena. Es posible, entonces, que aquellos que soportaron estoicamente una mala gestión de la crisis económica no toleren ahora una mala gestión de la recuperación. Si es así, es muy probable que a la crisis eco-

nómica le siga la crisis social. En manos de los gobiernos está el evitarlo.”

El contrato social despliega la idea y el valor constitucional de la igualdad; si ésta se da en proporciones razonables, casi todo se puede soportar, incluso los sacrificios económicos. Pero si se hace visible una desigualdad notoria, sin justificación alguna, esa ruptura del pacto social puede llevar consigo graves consecuencias, dice Antón Costas en su citado artículo (COSTAS, *El País*, 2.2.2014):

“La razón es que la tolerancia social a la desigualdad cambia a lo largo del transcurso de una crisis. Esa tolerancia es elevada cuando las cosas están mal para todos. Pero puede cambiar de forma brusca cuando una parte de la población percibe que el vaso de la recuperación no rebosa y ellos no se benefician. La indignación moral con esta falta de equidad puede provocar la aparición de la crisis social.”

Estas tesis las toma Antón Costas del también economista — y politólogo — Albert. O. Hirschman, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (recientemente fallecido). Paradojas sobre el aguante de la desigualdad, que no es otra cosa que el agotamiento, gasto o dispendio del contrato social en sus diferentes formas, explicadoras de las situaciones explosivas que comienzan a percibirse en España, en unos momentos en los que el comercio exterior parece que va bien y la famosa prima de riesgo se ha aquietado en sus niveles menos agresivos.

Según el economista Antón COSTAS, tres son los obstáculos para un despliegue equitativo y progresivo de la economía tras la crisis financiera del 2008. El primero, el gigantismo o macrocefalia del sector financiero con respecto al resto de la economía. El segundo, los grandes desequilibrios comerciales globales, el cotidiano de Alemania con el resto de la

zona euro por la parte que nos toca. Pero el tercero es la desigualdad. Que, pese a no reparar demasiado en ello, es el más peligroso para la supervivencia de la propia democracia y del mismo sistema. Al menos, en las proporciones que hoy se conocen en Portugal y España. No solamente porque esa situación corrompe los fundamentos éticos de una sociedad, sino porque pone de manifiesto algo que se veía en las novelas de Charles Dickens y parecía ya olvidado: que las clases ricas se sientan diferentes e impasibles frente a los sufrimientos de todos los demás. Y de todas las formas, para lo que aquí nos inquieta (COSTAS, *El País*, 29.9.2013):

“La desigualdad polariza la sociedad en dos grupos, no solo de renta, sino también de expectativas de futuro. El resultado es un aumento del malestar y de los conflictos sociales de todo tipo: protestas, manifestaciones, huelgas y violencia social y política. Esto hace imposible la existencia del contrato social que toda sociedad necesita para funcionar.”

La acre y sostenida desigualdad puede poner fin al contrato social y eso puede ser gravísimo. Algo que no se resuelve con medidas de orden público como parece creer el poder político español, que ha vuelto a resucitar las multas económicas contra todo lo que se mueve, de un modo semejante a como actuaban los Gobernadores civiles de tiempos de Franco y ahora lo hacen los Delegados del Gobierno (MARTÍN-RETORTILLO, 1975). Represión, que como ya ocurrió bajo la dictadura, y está visto que hay quien no lo ha aprendido todavía, no detiene sino que incrementa las movilizaciones, extiende la solidaridad con los represaliados y enfada todavía más a las personas sancionadas.

Las circunstancias no son para tomárselas a broma. Antes se pedía en este artículo perspectiva histórica. No está de

más, pues, que recurramos a un historiador de primera fila, Julián CASANOVA, que diagnostica lo que hay en las clases dominantes españolas tras su manifiesto miedo del Gobierno a la protesta social, para la que no tienen más respuesta que la vieja “mano dura”. La tesis de Casanova es que estamos al final del paradigma de consenso entre capital y trabajo que surgió en Europa tras la II Guerra Mundial y que en España contribuyó a asentar la democracia. Nada más y nada menos que el fin de un tiempo en el que se dividían las esferas de influencia de partidos y sindicatos, a cambio de beneficios sociales, distribución de la renta y democracia política. Eso se ha acabado y también Casanova recurre al resquebrajamiento del pacto o acuerdo social (CASANOVA, *El País*, 10.3.2012):

“Al romper el amplio acuerdo en torno al crecimiento económico, los beneficios sociales y la distribución de la riqueza, el nuevo orden acabará excluyendo y echando del sistema a muchos ciudadanos que ya lo habían asimilado. Pese a las lógicas ganancias que eso proporcione a las élites políticas y financieras, auténticas beneficiarias de este nuevo orden, el resultado puede ser un nuevo período de confrontación, con algunos niveles de conflicto violento extrainsitucional. Una vuelta, por otros medios, a la cultura de enfrentamiento que dejó arruinada Europa no hace mucho tiempo.”

Conviene saber, pues, de dónde venimos, qué paradigma social se abandona, porque la voluntad general que estructuró los sistemas constitucionales portugueses y españoles está fuera de los circuitos del poder; y las fuertes protestas que vemos hoy en España no son sino una expresión de este fenómeno histórico y jurídico. Consistente en el abandono, fractura, quiebra o rotura del viejo contrato social que hoy es, menos que nunca, una ficción superflua.

2. Carl Schmitt revisitado: un “estado de excepción” por motivos financieros

El ataque al contrato social no ha venido del lado de sus contratantes mayoritarios, clases medias y trabajadoras, desempleados, pensionistas. Ha sido un plan llegado desde arriba, desde donde se cuecen los grandes negocios, se dominan los medios de comunicación y los Gobiernos. En España, en un primer momento se atacó a los funcionarios en general con el reclamo de los gastos superfluos, el adelgazamiento del Estado, acabar con las duplicidades y demás oraciones de toda esa liturgia. Tuvo apoyo popular el tópico hasta que la gente se dio cuenta, a través de los recortes gubernamentales del presupuesto, que la mayoría de los funcionarios lo eran de servicios esenciales, como la educación y la sanidad, cuando no de la policía municipal, bomberos o fuerzas de seguridad estatales. Es decir, funcionarios de funciones absolutamente necesarias, tanto como las suprimidas becas de los comedores escolares o las ayudas para comprar los libros del colegio.

Pero los tópicos tienen su fuerza, sobre todo cuando se repiten. En España y Portugal nos han insistido en una idea bastante absurda: la de haber vivido la ciudadanía por encima de nuestras posibilidades. Así se ha extendido una especie de Miércoles de Ceniza (*memento homo...*) ante el que buena parte de la ciudadanía ha ofrecido su humillada cabeza. Boaventura de Sousa Santos ha llamado la atención sobre esto porque, de hacer caso al tópico, resultaría que hay que bajar la Educación y rebajar la Sanidad Pública porque en Portugal (lo mismo que en España) se han conseguido unos niveles bastante aceptables en esas dos actividades. Se pregunta este sociólogo por el concepto mismo de “normalidad”. Pues con esos parámetros, lo “normal” puede ser lo perfectamente anormal, como que un matrimonio joven renuncie a tener hijos por no poseer suficiente dinero y perspectivas, que se

exija solidaridad a los pensionistas pero no a los grandes beneficios de las multinacionales o la banca, a las rentas más altas protegidas en sus *offshores* (Boaventura de Sousa SANTOS, *Público. es*, 12.1.2014).

Entonces, ¿qué es lo normal y qué lo excepcional? Los argumentos de carácter financiero para suprimir o recortar derechos adquiridos y prestaciones sociales, ¿no serán más bien una presión excepcional al normal uso de la Constitución y la interpretación de ésta? Esto lo ha demostrado de modo suficiente y con vigor António HESPAÑA. Dado que ha habido una sistemática campaña en Portugal contra los derechos adquiridos de los pensionistas y clases trabajadoras.

Los disparos portugueses al blanco del contrato social han venido del lado de los fundamentalistas de la austeridad. Las pensiones de las personas jubiladas, los subsidios de desempleo y, naturalmente, los servicios de salud y educación, se presentaron como un dispendio, como una suma de privilegios corporativos que impedían el despliegue de ese hombre nuevo y joven, el emprendedor, como una carga onerosa de unas generaciones sobre otras que no habían accedido todavía a su primer empleo, y en tanto que un gasto ineficiente que lastimaba el desarrollo económico de nuestras sociedades.

En España esto se tradujo en los famosos recortes, que el Gobierno se empeñó — con poco éxito — en llamar eufemísticamente “reformas” y en la devaluación programada de las pensiones, con el soslayo del Pacto de Toledo, auténtico acuerdo de Estado hasta entonces vigente de todas las fuerzas políticas y sindicales para preservar el valor de las jubilaciones. En el ámbito portugués, basta seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como lo ha hecho António Hespanha, para saber que este órgano ha pasado de la salvaguarda de los derechos y pensiones de la seguridad social a, desde el año 2011, sostener que no se pueden crear expectativas fuertes de planes de vida o planes futuros, mediante una clara, ya,

línea de precarización de la situación jurídica de los derechos adquiridos (HESPANHA, 2012, pp. 9-80). Derechos que, según este Tribunal luso, nunca pueden sacrificar los intereses públicos emergentes como el saneamiento de las finanzas o la situación financiera de la seguridad social.

Si decimos que todo esto ha sucedido por esa palabra de conjuro, *crisis*, nos quedamos bastante cortos. Idea que tiene una raíz médica, clínica, hipocrática, pero anunciante de una evolución definitiva: el paciente se muere o se salva. Concepto que tiene mucho de artificioso y posee sus limitaciones, como lo ha puesto de manifiesto Luis M. Lloredo inclusive para la Filosofía del Derecho (LLOREDO, 2013, pp. 109-133). Además, señala António Hespanha que esto ha creado un auténtico discurso que bloquea cualquier argumentación, pues se mueve entre el tópico de la inevitabilidad (la necesidad) y el de la urgencia de las soluciones, la salvación pública, que dificultan sobremanera el uso de argumentos racionales (HESPANHA, 2012, pp. 9-80).

¿Cómo se llegó hasta aquí? Hay explicaciones convincentes, pero no tantas. Pues el neoliberalismo trajo consigo también en su triunfo la figura del intelectual y profesor domesticados, la gloria efímera del antiguo crítico convertido a la apología del mercado, concebido éste como única fuente de la libertad económica y política; según ya lo veía hace diez años y más António José Avelãs Nunes (AVELÃS NUNES, 2003, p. 63). Con todo, hoy en España existen al mismo tiempo algunas narraciones sólidas, hasta desde un punto de vista bastante elemental, pedagógico o didáctico, divulgador en todo caso, tal y como lo ha logrado el libro de éxito *Hay vida después de la crisis* (DÍEZ, 2013). Aunque es un libro que abusa de las crisis cíclicas o de las metáforas naturalistas (tsunami), tiene suficiente información y espíritu autocrítico como para comprender lo acontecido en España. El historiador Josep FONTANA nos ha dado un concepto clave no por conocido

menos importante: desregulación. Que arranca de lejos, de la década de los setenta, cuando en los USA se abandonó la preocupación por el pleno empleo y quebró la relación directa entre la mejora de la productividad y los salarios, que estimulaba a su vez el impulso económico por la vía de la demanda de bienes de consumo. Se reemplazó el modelo por la expansión del crédito, la contención de los salarios y se desmantelaron las protecciones sociales de trabajadores y trabajadoras. Esta tendencia alcanzó su cénit con la Ley de modernización de los servicios financieros de 11 de noviembre de 1999. Esta ley de Clinton derogó todas las normas de los controles de los poderes financieros (algunas de tiempo de F.D. Roosevelt) y la prohibición de los bancos para especular con los ahorros de los clientes (FONTANA, 2011, pp. 932-933).

Pues lo que hizo el desregulado capital financiero en los USA y en Europa fue precisamente eso, especular. Y la socialdemocracia, incluso sus terceras vías así llamadas, se plegó a esa política económica y luego, con algunos matices, a la austeridad dominante (SEVILLA, 2011, p. 456). Hubo quien pensó:

“...que ante el fracaso de los mercados desregulados había llegado nuevamente el momento para la socialdemocracia. Sin embargo, pronto se pondría de manifiesto el error de dicho pensamiento ante la realidad de las medidas adoptadas que serían el reflejo, en negativo, del enorme poder de las grandes instituciones financieras...”

De manera que, en el pensamiento iusfilosófico español, hay quien exige a la socialdemocracia que retorne al concepto de “justicia social” (RODRÍGUEZ PRIETO, 2012, pp. 292-322). Instituciones financieras que colocaron, también con gobiernos socialdemócratas, en posición genuflexa a las sociedades civiles portuguesa y española. Y llegaron, desde la *persona ficta* Europa, su BCE y el FMI, las directrices que exigían un rebaje de los

salarios y pensiones. Como esto no se podía hacer en el nombre de la Constitución ni del contrato social que le da soporte, ni mucho menos desde nuestras soberanías respectivas, se ha recurrido a lo que António Hespanha ha caracterizado como un *estado de excepción* y aquí se le añade que por motivos financieros. Situación que no está prevista en la Constitución española, pues los estados de alarma, excepción y sitio se derivan de otros supuestos fácticos y tienen otros condicionantes y procedimientos (artículo 116 de la Constitución española). Tampoco es el clásico *estado de sitio* que desarrollaron Saint-Just y Maximilien Robespierre (CRUZ VILLALÓN, 1980, pp. 130-131 y 280-282). Pues la categoría del *interés público* al que se subordinan expresamente las pasiones y los intereses privados, ante la distribución del pan y el desabastecimiento por ejemplo, está, por su justicia social, en las antípodas del fundamentalismo de la austeridad actual que prescinde del sufrimiento de la mayoría de la población. Además, la negativa a emplear a los soldados y someter esos procedimientos a la ley marcial honra en verdad a Saint-Just y a Robespierre. HESPANHA describe con puntería otro modelo que puede resultarnos más próximo y comprensible, que es el de Carl Schmitt.

Alguna idea puede darnos para ver el alcance de lo sucedido, sobre todo los años 2010 y 2011, la crítica de Naomi Klein, cuya labor propagandística ha sido recogida en exitosos documentales televisados. Según esta autora, los poderes financieros y sus vicarios gubernamentales aprovechan el momento peor de las crisis, cuando reina el miedo y el desconcierto, para imponer mediante un *shock* su política contraria a las rentas del trabajo y su austeridad fundamentalista (KLEIN, 2007, p. 27). Eso es cierto que ha acontecido, pero solo puede explicar la coyuntura o coyunturas (presiones de todo tipo, propaganda malintencionada, mercados desbocados, alza de la prima de riesgo, el rescate en el caso de Portugal, etcétera). Hay que ir más al fondo

constitucional del asunto y por eso António Hespanha se ha acordado de Carl Schmitt.

Efectivamente, la teoría de la excepción de Carl Schmitt expuesta en su *Teología política* arranca con una crítica a la Ilustración, a su voluntad general, a la racionalidad de sus leyes; su reproche total es el siguiente (Schmitt, 1975, pp. 65-67):

“El racionalismo de la época de la Ilustración no admite el caso excepcional en ninguna de sus formas.”

Y, sin embargo, la excepción es más importante para Carl Schmitt que la regla, pues, desde su política teologizada:

“El estado excepcional tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro en la Teología.”

Ya se sabe que el milagro es decisivo para las cuestiones de fe. Pero hay más; ya que el Derecho del Estado democrático no es sino una pura repetición formalista (1975, p. 45):

“En la excepción hace la vida real con su energía saltar la cáscara de una mecánica anquilosada en pura repetición.”

La Constitución con pretensiones de norma de Hans Kelsen le parece una prolongación del raciocinio formalista y generalizador de la Ilustración, así como el espejismo de considerar al Estado como “algo puramente jurídico, algo normativamente vigente.” (Schmitt, 1975, pp. 48-49). El Estado se ha de pensar al margen del Derecho si procede, nunca ha de atarse las manos estatales a las normas, sino que es un concepto yuxtapuesto a éstas. En todo caso, al no existir para Carl Schmitt (1975, pp. 35 y 97) la soberanía popular (su voluntad general, su contrato social), entonces:

“Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción.”

Y, en verdad, no resulta nada fácil determinar exactamente quién ha dictado ese estado de excepción por motivos financieros que ha engendrado esa agresión a las rentas del trabajo en España y Portugal. Que aprovechó el momento traumático de la crisis financiera, el *shock*, eso está claro. Pero hay más cuestiones constitucionales, por lo menos en lo que a España respecta. En la teoría, este estado de excepción no es el modelo de la antigua República de Roma. Consistente en una autorización a los cónsules (*Videant consules*) para desplegar la represión, durante un tiempo limitado y en circunstancias extraordinarias, con la adopción de una serie de medidas (detenciones, confiscaciones, etcétera) en el período excepcional conocido como *Senatus Consultum Ultimum*. Hay quien (Ungern-Sternberg) ha asociado esto a las tesis de Carl Schmitt, lo que ha sido negado y criticado con justeza por el catedrático e historiador de la Antigüedad Antonio Duplá. Pues no se puede mirar el pasado de Roma institucional con unos anteojos conceptuales schmittianos propios del siglo XX (Duplá, 1990, p. 35).

Por demás, el estado de excepción de Carl Schmitt es algo *existencial*, no se refiere a un momento, a un instante, a unas circunstancias extraordinarias, sino a la necesidad de la *vida real* de invadir todos los territorios que falta hiciere, dentro o fuera de las instituciones (“la excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal nada prueba; la excepción, todo; no sólo confirma la regla, sino que ésta vive de aquella”, escribe Carl Schmitt en su citada *Teología política*, p. 45). Es una autoridad irresistible, como la naturaleza, que no conoce límites para quien detenta la soberanía, el poder completo y último, fabricante del mismo estado de excepción.

En España, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha publicado un libro titulado *El dilema*, cuyo subtítulo *600 días de vértigo* nos habla de las circunstancias financieras

extraordinarias aquí tratadas, pero sobre todo de un estado de excepción nada coyuntural, nada limitado, que se ha convertido en existencial tal y como quería Carl Schmitt (RODRÍGUEZ ZAPATERO, 2013). Dejemos aquí aparte un balance exhaustivo de la acción de este político español (que también tuvo sus momentos positivos). Su política económica ha sido la de toda la socialdemocracia occidental: la incorporación del neoliberalismo financiero con algunos matices políticos en el plano de las libertades. En cuanto al libro, éste nos describe a la perfección cómo se instaló en España ese estado de excepción schmittiano: a) el 5 de agosto del 2011 el presidente del Banco Central Europeo (BCE) Jean-Claude Trichet escribe una carta “estrictamente confidencial” al Presidente del Gobierno español, al que le exige la adopción urgente del estado de excepción por motivos financieros b) el Gobierno pone en práctica los deseos del BCE, aunque ya había existido (mayo del 2010) una impopular rebaja de los derechos sociales adquiridos c) los dos partidos principales, PSOE y PP al unísono, acometen una reforma constitucional que instala de modo permanente en nuestro sistema la unilateral filosofía de la austeridad. Sucesos gravísimos pues, en la práctica, estos dos partidos políticos, desde 1978, siempre mantuvieron que no había que tocar la Constitución.

La carta de Trichet pone de manifiesto quién detenta la soberanía (RODRÍGUEZ ZAPATERO, 2013, pp. 405-408). Es una epístola propia del rey de KANTOROWICZ, de uno de sus dos cuerpos, el político, que tiene el don legal de la ubicuidad pues no conoce fronteras. Trichet le indica a R. Zapatero lo que tiene que hacer y legislar en España; entre otras cosas: restricción de la negociación colectiva, flexibilización del contrato de trabajo o despido libérrimo, reducción salarial general en lo público y lo privado y — es Trichet quien lo escribe en negrita — *sostenibilidad de las finanzas públicas*. Con los recortes generales presupuestarios por todos conocidos.

La finalidad es (Trichet *dixit*): “recuperar nuevamente la confianza de los mercados”.

El PSOE y el PP se pusieron manos a la obra e incluyeron la *cláusula de oro* (tan cara a Merkel y Sarkozy) en el artículo 135 de la Constitución española. Que encarga a todas las Administraciones públicas españolas someterse al principio de estabilidad presupuestaria, que no es otro que el fijado por la Unión Europea para sus Estados miembros. El volumen de deuda pública española no podrá superar lo fijado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Fijémonos que, entre la carta de Trichet (agosto del 2011) y la publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo reformado, BOE de 27 de septiembre del mismo 2011, transcurre poco más de un mes. El Banco Central Europeo manda y España obedece, en una manifestación clara de falta de legitimidad democrática tanto del Sr. Trichet (¿quién le ha elegido?) como de la servil decisión española adoptada.

RODRÍGUEZ ZAPATERO asegura que el procedimiento adoptado para la reforma constitucional es el del artículo 167 de la Constitución por “no afectar a materias protegidas por la Carta Magna” (RODRÍGUEZ ZAPATERO, 2013, p. 260). Y no se sometió a referéndum porque el PSOE y el PP (que estaba feliz pues esa cláusula figuraba en su programa) no quisieron, ya que para ello tendría que obtener el apoyo del 10% de senadores y diputados. Y PSOE y PP cerraron filas para que no se consultase al pueblo español, que es quien, teóricamente, detenta la soberanía (art. 1 de la Constitución); pero de facto es quien domina la excepción (Trichet), quien está al mando, el que detenta la soberanía por razones financieras, dándole así la razón a Carl Schmitt.

Ya escama e indigna que los partidos principales nos escamoteen la discusión pública y la votación popular en algo tan decisivo para nuestras vidas. Pero es que, además, eso no es constitucionalmente de este modo. El procedi-

miento adecuado debió de ser el del art. 168 de la Constitución, que exige el referéndum en todo caso. Porque es una reforma que concierne al artículo 1.1 de la Constitución (el Estado social de Derecho), esa norma se ubica en el Título Preliminar, y toda reforma que afecte a ese Título ha de someterse a referéndum. Y esto no es una cuestión de interpretación porque la propia Ley (BOE de 27.9.2011) que reforma el artículo 135 dice lo siguiente en su Exposición de Motivos:

“la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos.”

Estabilidad presupuestaria, fundamentalismo del déficit y la austeridad que, en realidad pero en sentido negativo, ha condicionado seriamente nuestras vidas y ha menguado, eso es lo vemos, nuestra prosperidad presente y esperemos que no se prolongue en la del futuro.

Bibliografía

- AVELÃS NUNES, António, (2003) *Neoliberalismo e Direitos Humanos*, Caminho, Lisboa.
- (2010), *AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ... Reflexões a propósito das aventuras e desventuras dos Estado social*, Avante, Lisboa.
- BARRÓN, Ignacio, (4.2.2014), “Privatización total de Bankia para 2016”, *El País*.
- CASANOVA, Julián, (10.3.2012), “El miedo a la protesta”, *El País*.
- COSTAS, Antón, (29.9.2013), “Que no nos digan que fue un sueño”, *El País*. (2.2.2014), “El riesgo, ahora, es la crisis social”, *El País*.
- CRUZ VILLALÓN, Pedro, (1980), *El estado de sitio y la Constitución*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- DIDEROT, Denis, (1989), *Escritos políticos*, estudio preliminar de A. Hermosa Andújar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

- DÍEZ, José Carlos, (2013), *Hay vida después de la crisis*, Plaza&Janés, Barcelona.
- DUPLÁ ANSUÁTEGUI, Antonio, (1990), *Videant consules. Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana*, Prólogo de Guillermo Fatás, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.
- ESTEFANÍA, Joaquín, (2007), *LA LARGA MARCHA. Medio siglo de política (económica) entre la historia y la memoria*, Península, Barcelona.
- FONTANA, Josep, (2011), *Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Pasado y Presente, Barcelona.
- HEGEL, G. W. F., (1955), *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Felix Meiner, Hamburg.
- HESPANHA, António, (2012-Abril/Junio), “A revolução neoliberal e a subversão do ‘modelo jurídico’. Crise, Direito e Argumentação Jurídica”, *Revista do Ministério Público*, pp. 9-80.
- KANTOROWICZ, Ernst H., (1985), *Los dos cuerpos del rey*, Alianza, Madrid.
- KLEIN, Naomi, (2007), *La doctrina del shock*, Paidós, Barcelona.
- LACASTA ZABALZA, José Ignacio, (1988), *Cultura y gramática del Leviatán portugués*, Prefacio de António Hespanha, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.
- “Hegel y los Derechos Humanos”, en *Historia de los derechos fundamentales*, dirigida por Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández, Rafael de Asís y F. Javier Ansuátegui, Dykinson, Madrid, 2009, Tomo III, vol. II, Libro II, pp. 799-841.
- LLOREDO, Luis M., (2013), “La Filosofía del Derecho en tiempos de crisis: en torno al estatus epistemológico de la filosofía jurídica”, *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, n.º 16, pp. 109-133.
- MAGALHÃES, Gabriel, (2012), *Los secretos de Portugal. Peninsularidad e ibe-rismo*, RBA, Barcelona.
- MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo, (1975), *La cláusula de orden público como límite — impreciso y creciente — del ejercicio de los derechos*, Cívitas, Madrid.
- MARTÍNEZ GARCÍA, Jesús Ignacio, (2012), “Derecho e incertidumbre”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, Tomo XXVIII, pp. 97-118.
- MUÑOZ, Juan, (1969), *El poder de la banca en España*, prólogo de Juan Velarde, ZYX, Madrid.
- NAVARRO, Vicenç, (3.2.2014), “La cultura del insulto y la manipulación”, blogs.publico.es.
- PISARELLO, Gerardo, (2011), *Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático*, Trotta, Madrid.
- RODRÍGUEZ PRIETO, Rafael, (2012), “De la socialdemocracia al socialismo. La socialdemocracia en la encrucijada: declive, renuncias

- y alternativas”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, Tomo XXVIII, pp. 292-322.
- RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis, (2013), *El dilema. 600 días de vértigo*, Planeta, Barcelona.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques, (1985), *Discurso sobre la Economía política*, estudio preliminar de J. E. Candela, Tecnos, Madrid.
- SANTOS, Boaventura de Sousa, (12.1.2014), “Las doce uvas de la ira”, *Público.es*.
- SEVILLA, José V., (2011), *El declive de la socialdemocracia*, RBA, Barcelona.
- TAINE, Hippolyte, (1986), *Les origines de la France contemporaine*, Introducción de F. Leger, Robert Laffont, Paris, tomo I.

Resumen: ¿Cómo explicar, desde la filosofía jurídica clásica, pero también desde la realidad sociológica, lo ocurrido en España y Portugal estos años recientes de crisis económica? ¿Cómo dar cuenta de la pérdida de derechos adquiridos en el plano social, de la capacidad económica de las jubilaciones, del tremendo desempleo español, de la situación penosa de la juventud todos estos últimos años? El autor recurre a unas figuras clásicas del pensamiento jurídico: a) el contrato social, que no es una mera ficción como quiso el pensamiento conservador, sino que ha sido, con diferentes matices, un negocio realmente existente en Portugal y España b) dicho contrato ha quebrado, de manera dolorosa para la mayoría social, sus suscriptores más débiles y para las rentas del trabajo y c) todo se ha hecho con el pretexto de la “sostenibilidad financiera”, que se ha convertido en un “estado de excepción” permanente, a lo Carl Schmitt, para la sociedad portuguesa y la española.

Palabras clave: contrato social, quiebra del contrato social, sostenibilidad financiera, Carl Schmitt, estado de excepción.

Portugal and Spain: the “state of exception” for financial reasons

Abstract: How to explain, from the standpoint of classical legal philosophy, but also from that of the sociological reality, what happened in Spain and Portugal these recent years of economic crisis? How to account for the loss of vested social rights and economic capacity of pensioners, the tremendous Spanish unemployment, the plight of youth all these years? The author uses classical figures of legal thought like a) the social contract, which, rather than being a mere fiction as conservative thought has argued, has been, although with different nuances, a true deal that took place in Portugal and Spain; b) the contract is broken, and most painfully so, for the social majority, the weakest and the labour income, and c) everything

was done under the guise of “financial sustainability”, which has become, in Carl Schmitt’s terms, a permanent “state of emergency” for Portuguese and Spanish society.

Keywords: social contract; bankruptcy of the social contract; financial sustainability; Carl Schmitt; state of emergency.

José Ignacio Lacasta Zabalza
Universidad de Zaragoza (España)